

LA EUROPA DE LAS CIUDADES

Una ciudad donde sólo hubiera catalanes no sería una ciudad, sino un pueblo (Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona)

El tránsito de la dictadura franquista a la democracia ni fue modélica, ni fue diseñada por nadie (menos por el Rey), ni fue un pacto de élites, ni fue inodora, insípida e incolora. Nunca ha sido fácil en nuestro país conquistar y, sobre todo, conservar las libertades y la democracia, aunque a veces el precio a pagar haya sido el mantenimiento en el poder de la vieja clase dirigente y la falta de reconocimiento y empatía por las víctimas y los vencidos de la dictadura. Así mismo, muy pronto y como consecuencia del golpe de Estado o de timón de 1981, el espíritu constitucional (derivado del pacto de las plataformas antifranquista) que reconocía la plurinacionalidad española y la singularidad de sus territorios, desde los derechos forales vasco y navarro hasta la asimetría en las comunidades con lengua propia, se fue diluyendo en el llamado “café para todos” del Estado de las Autonomías, que a su tiempo supuso un tapón al desarrollo de las competencias y los recursos de los entes locales, es decir, de las ciudades.

El frondoso árbol de la Generalitat de Cataluña ha tapado la rica arboleda del municipalismo democrático que, en estos últimos cuarenta años, ha sido uno de los principales motores de la transformación de nuestras ciudades y de la construcción nacional catalana a partir de la cohesión social. Porque la construcción nacional no es aséptica e incolora sino también de clase, de políticas concretas, de servicios públicos o privados, de derechos o de mercado, de aumento de las desigualdades o de redistribución de rentas, de casta o de mérito, de precariedad o de oportunidad, de sálvese quien pueda o de solidaridad interclasista, intergeneracional e interterritorial. El nosotros nacional con frecuencia es reduccionista y excluyente de amplios sectores sociales por razones diversas, principalmente, de tipo económico y cultural. La promesa del paraíso, incluso en la tierra, a cambio de los sacrificios del presente nos recuerda el mantra religioso. No hay que preocuparse y, mucho menos, enfadarse puesto que en el paraíso seremos felices y comeremos perdices.

El presidente Jordi Pujol y el alcalde Pasqual Maragall encarnaron como nadie las dos almas del catalanismo político y protagonizaron, a cara de perro, la confrontación más

dura y sangrante por el poder. Una pelea que empezó en el año 1981 en Vic, la capital de la Catalunya catalana, tal como pregonó su alcalde, con la división del municipalismo a partir de la creación de *l'Associació Catalana de Municipis* como reacción a constitución de la *Federació de Municipis de Catalunya*, presidida por el alcalde de Girona, Quim Nadal. La batalla continuó con la mayoría absoluta de CiU en el Parlament y la aprobación de las Leyes de Ordenación Territorial (1987) que significaban la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona (paralelamente a la disolución del Gran Londres por Margaret Thatcher), vista por el nacionalismo conservador, católico y carlista, como un contrapoder de la Generalitat, al mismo tiempo que se resucitaba -en un ejemplo paradigmático de nostalgia por la nación soñada frente la nación real- el mapa comarcal de 1936, con un sistema electoral ideado para asediar las capitales comarcales mayoritariamente en manos de las fuerzas progresistas y de izquierdas.

La batalla se extendería allende de las fronteras patrias en el marco de la Unión Europea con un Pujol liderando la Asamblea de Regiones Europeas (1985-1996) y convirtiendo a las cuatro regiones más ricas en motores de la construcción de la Europa de los pueblos, y un Maragall liderando, con una visión más hanseática y federal, la Europa metropolitana y presidiendo el Comité de las Regiones (1996-1998), en donde estaban representadas también las ciudades. La batalla continuaría más allá de la larga presidencia de Jordi Pujol, con su delfín (ya que le gustan las metáforas marineras) Artur Mas, quién aprovecho la reforma de l'Estatut, la vía del nuevo pacto entre Catalunya y el Estado, para torpedear el Tripartito por su ala independentista (ERC), primero subiendo el listón más allá de la Constitución y, a continuación, pactando sin rubor con el PSOE (a espaldas del PSC, por lo menos de Maragall) su laminación y ofreciéndose como el interlocutor privilegiado con el Estado. El PP no entendió o no quiso entender que el objetivo de Artur Mas no era la independencia de Catalunya sino el mantenimiento del poder con un nuevo acomodo constitucional.

La pugna entre estas dos concepciones de reparto del poder territorial en Catalunya viene de lejos y quizás sea pertinente ilustrarlo con algunos ejemplos. Empecemos con el concepto medieval de "carrerratge" por el cual muchas villas pasaban (por voluntad propia) a ser consideradas calles de una ciudad importante, como la de Barcelona (pero también Lleida o Girona), a cambio de protección ante la pretensión de los señores feudales de continuar viviendo del cuento o de la leyenda de san Jorge, en la cual interpretaban el maléfico e insaciable dragón. El título de "carrer de Barcelona"

implicaba gozar de los mismos privilegios, libertades, gracias, franquicias, usos y costumbres, concedidos a la ciudad de Barcelona a cambio de prestación económica y humana (en caso de necesidad de formar huestes), así como, de manera emblemática, de incorporar emblemas de la ciudad de Barcelona en los respectivos escudos municipales. A finales del siglo XV se contaban más de setenta “carrers de Barcelona” esparcidos por todo el Principado. Una asociación municipal importante capaz de poner coto a la extensión y rapiña del poder señorial. Pasqual Maragall siempre lo pondría de ejemplo en sus actos públicos cuando visitaba y pregonaba por las ciudades del área metropolitana y del resto de Cataluña.

Cebrià Montoliu (1873-1923), funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, que le permitió viajar y residir en diferentes ciudades europeas, fue el urbanista más importante tras Ildefons Cerdà, el introductor del socialismo reformista y municipalista británico (influenciado por John Ruskin y Wiliam Morris) y el principal teórico de la “ciudad-jardín” en contra del modelo de la Gross-Berlín. Frente a la Barcelona de los negocios impulsada por la Lliga Regionalista emergente –dirigida por la Generación de 1901, tal como etiquetó Jaume Vicens i Vives a los capitanes de industria que habían decidido implicarse políticamente-, Montoliu apostaba sin tapujos por la ciudad democrática (cívica, diría él), que garantizase el derecho a la vivienda digna a la clases humildes con un control público del suelo para evitar la especulación. El funcionario municipal y bibliotecario del Museo Social lo tenía claro y dejó escrito exactamente cien años atrás: “La ciudad, suprema encarnación del espíritu colectivo, glorioso símbolo material de todas las comunes aspiraciones hacia un mejor tipo de humanidad futura”. En este sentido, una vez más, la tarea encomiable de la Mancomunitat soslaya la acción pública municipal y, en primer lugar, del Cap i Casal (de la capital). El Ayuntamiento de Barcelona será una locomotora formidable de las políticas públicas, con la enseñanza y la cultura por mascarón de proa, y convirtiéndose en los años treinta en la segunda administración pública española, tan sólo por detrás de la Administración, con más de siete mil empleados. La ingravidez reluciente de la Generalitat republicana (con más ruido que nueces) nos esconde la centralidad del Saló de Cent del edificio histórico del Ayuntamiento de Barcelona, verdadera ágora de la política catalana.

El prestigioso abogado, republicano y catalanista, Amadeu Hurtado nos explica una anécdota que subraya la centralidad y la potencialidad de Barcelona. En la cena de gala celebrada en el Palacio Nacional de Montjuïc con motivo de la aprobación por parte de las Cortes del Estatuto de autonomía de 1932, el diputado de ERC salió a la terraza y se acercó a saludar a Luis Bello, el eminente pedagogo y diputado socialista que había presidido la comisión parlamentaria donde se discutió con pasión y, a veces, con acritud el texto estatutario. Bello, que miraba fijamente las luces de la ciudad le confesó: *“Esto es el Estatuto. Y señalaba con el brazo extendido de punta a punta el horizonte urbano. Sin esta metrópoli –añadía- nadie hablaría del Estatuto, pero ante esta obra magna no había otra salida que hablar del Estatuto. Lo decía conmovido y como expresaba mi propio pensamiento, también me conmoví. Era un homenaje a los constructores de la gran capital catalana; aquellos hombres que no sabían a ciencia cierta si eran catalanistas ni, seguramente, habían pasado demasiadas horas reflexionando sobre las doctrinas del nacionalismo, pero, a pesar de todo, sabían que eran catalanes y que con su trabajo diario levantaban Cataluña”* (Cal revisar el catalanisme?, Perpinyà, 1945)

El catalanismo político, que emergió con fuerza en la ola creciente del regeneracionismo español, tenía un doble objetivo: la modernización económica y política de España (la democracia republicana) y el autogobierno de Cataluña. El estatuto era (y es) el pacto con España, no el camino a la secesión. Por consiguiente, el relato independentista se fundamenta en la destrucción del catalanismo (cuya principal consecuencia es el debilitamiento de la nación y de la cohesión social), la confrontación con el Estado (hoy “hacer república” es la expresión más del deseo secesionista que del proyecto cívico, inclusivo y socialmente progresista de los años treinta) y la implosión de la Unión Europea que posibilite (como lo hizo la implosión de la URSS o de Yugoslavia) un nuevo mapa político.

La nueva *Renaixença* del catalanismo político pasa por el proyecto inequívoco de la construcción democrática de la Unión Europea y por el protagonismo indiscutible de unas metrópolis donde viven las mismas y diversas etnias, donde hablan las mismas y variadas lenguas, que comparten los mismos problemas y los mismos deseos y que, seguramente, han dejado de ser las capitales de unos estados-nación obsoletos. A pesar de los pesares, y los nubarrones amenazadores sobrevolando el cielo europeo, todo indica que hoy en Cataluña asistimos a la resurrección del *Cobi* y que la sombra de Pasqual Maragall es más alargada que la de Jordi Pujol.

Andreu Mayayo i Artal (1959) es catedrático de Història Contemporànea y Director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals-Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Militante del PSUC, fue alcalde de Montblanc por ICV en la década de los noventa.